CONSTANCIA SECRETARIAL: A despacho del señor Juez el presente proceso pendiente de resolver el recurso de reposición y en subsidio apelación propuesto contra el auto que aprobó la liquidación de costas. Sírvasse Proveer.
El secretario.

DANIEL ARTURO DIAZ JOJOA

Verbal v.s. Compañía de Inversiones y Comercio S.A.S.

JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO

Cali, Dos (02) de Marzo de dos mil veintidós (2.022)

Rad. 760013103008-2015-00378-00.

Se procede a resolver el recurso de reposición y en subsidio apelación propuesto por el apoderado judicial de la copropiedad demandada contra el auto adiado 14 de Enero de 2.022 y notificado por estado el 18 del mismo mes y año.

I. ANTECEDENTES.

Mediante sentencia calendada 31 de Mayo de 2018 se concedieron las pretensiones del libelo introductor y denegada la reconvención de Prescripción Adquisitiva de Dominio, apelada por el extremo pasivo, demandante en reconevención fue atendido de manera favorable por el Tribunal Superior de Cali quien decidió confirmar en su integralidad la decisión fustigada.

Regresadas las diligencias a esta sede judicial, se abrió paso a las solicitudes pendientes de discernimiento, para posteriormente disponer el obedecimiento a lo resuelto por el superior, liquidando y aprobando las costas del proceso, decisión recurrida dentro del término por la pasiva y surtido el traslado respectivo conforme las voces del Artículo 9º del Decreto 806 de 2.020.

II. DEL RECURSO.

1. El profesional del derecho representante de la pasiva arguyó tras de una amplia transcripción de lo regulado frente la fijación de costas y agencias en derecho en el estatuto General del Proceso, Acuerdo PSAA 16-10554 del 5 de Agosto de 2.016 y Acuerdo 1887 de 2.003; enfatizando al tenor de lo regulado en el Artículo 7º del acuerdo actualmente en vigencia, el presente proceso se erige baja la derogada normatividad, por lo tanto al tratarse de demanda solamente declarativa la tarifa fijada no puede superar los veinte (20) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes para el año 2.015.

Seguidamente, relaciona pasajes de lo expuesto por la Corte Constitucional en Sentencia C-089 de 2.002, respecto los criterios para liquidación y conformación de la liquidación costas, destacando aquél emolumento solo tendrá lugar cuando en el expediente aparezca que se causaron, fueren acreditadas y comprobadas en el litigio.

3. Dentro del término de traslado del anterior recurso la profesional del derecho representante del demandante adujo, fuese desestimada la alzada elevada como quiera que, en aplicación ultractiva del Acuerdo PSAA 16-10554 de 2.016 la regulación eje de la liquidación fustigada es el Acuerdo No. 1887 de 2.003.

Señaló, pasa por alto el recurrente conforme la normatividad que cita, el criterio para determinar el valor de las agencias en derecho no oscila bajo la forma que arguye de forma aislada, toda vez que con base lo establecido en el numeral 1.1., se deberá fijar hasta el veinte (20%) por ciento del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia, sumado a la existencia de obligaciones de hacer derivadas del fallo, su monto, se aumentara hasta en cinco (05) salario mínimos legales mensuales vigentes.

De este modo, expone al tratarse el compulsivo de índole declarativo de condena, en armonía de lo consagrado en el Artículo 206 ibíd, deberá reajustarse la liquidación realizada al margen de lo establecido en la legislación aplicable, toda vez que los parámetros utilizados por esta judicatura se remontan entre 3% al 7.5% de lo pedida.

III. CONSIDERACIONES

En relación al trámite y oportunidad del recurso de reposición, según el artículo 318 del Código General del Proceso, las partes podrán recurrir las providencias, dentro de los tres días posteriores a su notificación. Al respecto la citada norma dispone: *“Procedencia y oportunidades. Salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen. El recurso de reposición no procede contra los autos que resuelvan un recurso de apelación, una súplica o una queja. El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten, en forma verbal inmediatamente se pronuncie el auto. Cuando el auto se pronuncie fuera de audiencia el recurso deberá interponerse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación del auto(...)”*

Por tanto, este recurso tiene como propósito que el mismo funcionario que dictó la providencia la modifique o revoque enmendando así el error en que pudo haber incurrido, y que en el presente caso, fue presentado con el lleno de los requisitos para su estudio.

IV. CASO CONCRETO

El apoderado judicial de la pasiva concentra su inconformidad, alegando trazó esta judicatura las agencias en derecho con base normatividad inaplicable al presente asunto, teniendo en cuenta la data de su iniciación.

Así pues, la sentencia de primera instancia proferida por esta dependencia judicial el 31 de Mayo de 2.018, dispuso en su numeral SEXTO “...*CONDENAR en costas a favor de la parte demandante a la parte demandada ANA OFELIA ARANGO POSADA, y para ello, se fija por concepto de agencias en derecho la suma de \$478.030.000.00, valor resultante de los parámetros establecidos en el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de Agosto de 2.016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura...*”

Sumado lo anterior, en vista de lo proveído por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, mediante fallo del 05 de Agosto de 2.019, tal carga económica continuó sobre la demandada – demandante en reconvenición, a saber señala el numeral 1° del artículo 365 del estatuto de los ritos civiles, “*se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto*”. De modo que, impone la Ley la sanción ordenada.

Ahora, de cara a la teoría arguida por el inconforme, se observa, efectivamente establece el Artículo 7 del Acuerdo PSAA16-10554 de 2.016, sus efectos rigen para los procesos que emergen a partir de la data su publicación, es decir, del 5 de Agosto de enunciada anualidad, delineando además, “...*Los comenzados antes se siguen regulando por los reglamentos anteriores sobre la materia, de manera especial los contenidos en los Acuerdos 1887 de 2003, 2222 de 2003 y 9943 de 2013 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura*”, por lo que en vista de la fecha de presentación de la demanda la tasación de las agencias derecho en la contienda de marras, debió someterse al margen de derogada normatividad en comento.

En esa medida, y si bien, visos de prosperidad se logran entrever de la inconformidad planteada, lo cierto es que no colige esta célula de justicia la integralidad del derrotero que la edifica, toda vez que la decisión que puso fin al litigio enantes no traduce en apego del párrafo del canon 4° *ibid*, sentencia meramente declarativa como refiere, pues sumado a la declaración plena y absoluta del predio génesis de la contienda suscitada a favor de la Compañía Inversiones y Comercio S.A.S., se ordenó el pago de los frutos civiles causados y condenó en abstracto a los perjuicios generados por la señora Ana Ofelia Arango. De ahí que, diáfano es, no se contrae el presente escenario a fallo “*solamente*” de declarativo, tornando errático considerar, el criterio de la fijación de agencias en derecho debe ajustarse al máximo de veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Así entonces, al tenor de lo consagrado en el Acuerdo 1887 de 2.003, el parámetro a seguir se contrae a lo definido en el Artículo Sexto Numeral 1.3. así: “*PROCESO VERBAL (“...”) Primera instancia. Hasta el veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. Si ésta, además, reconoce o niega obligaciones de hacer, se incrementará hasta cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes por este concepto. En los casos en que únicamente se ordena o niega el cumplimiento de obligaciones de*

hacer, hasta cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes.” (Negrita fuera de contexto)

Sobre el punto, vale subrayar, revisadas las actuaciones derivadas del decurso procesal no se avizora gastos o expensas que deban ser liquidadas como costas a cargo de la demandada, pero sí deben fijarse las agencias en derecho conforme “(...) las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”¹.

En ese orden, en armonía de las pretensiones planteadas y las reconocidas, se denota ascienden a la suma de \$240.000.000.00 Mcte, por lo que el porcentaje definido por la legislación aplicable se erige atendiendo todas y cada de las actuaciones de la profesional del derecho representante de la actora en el presente proceso verbal reivindicatorio con reconvención en pertenencia, aunado a su rol desplegado ante el Tribunal Superior de Cali; por lo tanto, se tasa en la suma de \$48.000.000.00 Mcte, correspondiente al 20% de los pedimentos ordenados.

En línea, la decisión emitida no configura obligación de hacer como interpreta la activa, toda vez que en exégesis de lo establecido en el Artículo 426 del C.G.P. la entrega de bien mueble o bienes de género distintos de dinero, son calificadas como de dar; aunado la transmisión del fundo es inherente a la declaración proferida.

De este modo, emerge avante la alzada enarbolada, bajo los presupuestos reseñados en líneas que preceden y así se declarará sin lugar al recurso subsidiario de apelación por la prosperidad e la reposición.

Por otra parte, manifiesta el perito designado en su oportunidad en el compulsivo enantes, Pedro José Aguado García, NO han sido cancelado por la demandada la suma fijada por esta dependencia judicial en el desarrollo de la etapa de instrucción y juzgamiento, por lo que se procederá a requerir tal extremo procesal, a fin de que proceda a cumplir la carga impuesta en obediencia de su deber de colaboración conforme las voces de nuestro estatuto procesal; *contrario sensu* de haber realizado el pago del emolumento deprecado se sirva arribar constancia de ello.

En consecuencia, el juzgado,

RESUELVE:

PRIMERO.- REVOCAR el auto adiado 14 de Enero de 2.022, por los motivos expuestos en la presente providencia.

¹ Art. 366 C.G.P.

SEGUNDO.- MODIFICAR las agencias en derecho de la primera instancia a favor de la parte demandante y a cargo de la parte demandada en la suma de \$48.000.000.00 Mcte, que corresponde al 20% de las pretensiones reconocidas.

TERCERO.- EN CONSECUENCIA, modificar la liquidación de costas efectuada el 14 de enero de 2022 la cual queda así:

Agencias en Derecho de la primera instancia	\$48.000.000.00
Agencias en Derecho segunda instancia	\$20.000.000.00
Total liquidación de costas	\$68.000.000.00

Son: sesenta y ocho millones (68.000.000.00) de pesos mcte.

CUARTO: REQUERIR a la parte demandada a fin de que proceda a realizar el pago de los honorarios fijados por esta instancia judicial al perito PEDRO JOSÉ AGUADO GARCÍA, en el desarrollo de la etapa de instrucción y juzgamiento del presente proceso; *contrario sensu* se sirva arribar constancia de su realización.

QUINTO: no hay lugar al recurso subsidiario de apelación por la prosperidad de la reposición.

SEXTO: En firme la presente providencia se proveerá sobre el mandamiento ejecutivo.

NOTIFIQUESE

LEONARDO LÉNIS
JUEZ I

760013103008-2015-00378-00